

Crónica del mes

Junio

Francisco Flores terminó su gestión presidencial reñido con los partidos de oposición política, con el Órgano Judicial y con las municipalidades, pero se agenció una nueva victoria política para su partido: le aseguró cinco años más al frente de la presidencia de la República. En efecto, el primero de junio, Elías Antonio Saca asumía la primera magistratura del país con la promesa de revertir el estilo autoritario de su antecesor, aunque dejó claro quiénes serían sus interlocutores. Durante su primera disertación, el nuevo mandatario prometió que concertaría con todos los sectores nacionales, poniendo de relieve una frase que sería repetida por los medios informativos durante los días siguientes: “no confundamos las demandas legítimas con los desmanes políticos, no confundamos las necesidades con las necesidades”, aseveró, refiriéndose al FMLN, cuya dirección había recomendado a sus funcionarios —diputados y alcaldes— no asistir a la ceremonia de traspaso de mando. En su discurso inicial, Saca reconoció la labor de sus antecesores: “los gobiernos presididos por Alfredo Cristiani, por Armando Calderón Sol y por Francisco Flores —dijo desde el altavoz— sentaron los cimientos de este nuevo país, que hoy nos comprometemos a impulsar de manera decidida e innovadora”. Al mismo tiempo, ratificó una de sus promesas de campaña y anunció quiénes serían sus interlocutores más cercanos: “quiero convocar a la empresa privada para que se construya un pacto por el empleo en el país”, dijo. Saca, finalmente, asistió ese día a su primera cumbre de mandatarios centroamericanos para discutir, entre otras cosas, la ratificación del TLC entre la región y los Estados Unidos.

Al término de la celebración oficial, las tres fuerzas opositoras presentes, el PCN, CDU y PDC

dieron un voto de confianza al discurso presidencial, mientras las cámaras de televisión se dirigían hacia los asientos vacíos de los invitados por el FMLN. Éstos habían decidido realizar una concentración pública para protestar en contra de un gobierno que consideraban ilegítimo. Pero el efeméridismo no se hallaba unido pues, según la prensa, los dirigentes “reformistas” se sumaron a una protesta paralela organizada por sectores sociales críticos al nuevo gobierno.

Ese mismo día, el ex candidato presidencial por el partido de izquierda, Schafik Handal, cambió el discurso beligerante que le caracterizó durante los días siguientes a los comicios de marzo y aseguró que su partido le tomaría la palabra a Saca para dialogar; pero retó al nuevo gobierno, a fin de negociar la superación de nueve puntos conflictivos, condición sin la cual no darían sus votos para aprobar el presupuesto general de la nación, estancado durante seis meses en la Asamblea Legislativa. Esa sería “la primera prueba de concertación”, dijo Handal a los periodistas.

Junto con la cronología de esa jornada, los principales medios informativos recogieron las primeras impresiones de los nuevos ministros que forman parte del gabinete de Saca. El primer día del mes, *La Prensa Gráfica* entrevista a Hugo Barrera, quien conducirá la cartera de Medio Ambiente. Barrera aseguró que la Ley del Medio Ambiente —la cual dijo desconocer— será cumplida mientras se halle al frente del ministerio al que llegó por pura casualidad. En similares términos se expresó el nuevo ministro de Turismo, Luis Cardenal, para quien se debe “vender la imagen de una país dinámico, seguro y amigable”, a fin de apuntalar el desarrollo turístico nacionales.

Finalmente, entrevistado por ese mismo rotativo, el nuevo secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah-Touché, aceptó que la capacidad de maniobra del nuevo gobierno en materia fiscal "es limitada"; sin embargo, cuestionado sobre la posibilidad de aumentar el nivel de recaudación con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aceptó que "no es fácil subir la carga tributaria". Zablah-Touché, uno de los funcionarios del gabinete de Saca con mayor aceptación, declinó ofrecer una cifra meta: "ojalá fuera del 15 por ciento o del 16 por ciento, pero en cinco años es una tarea muy difícil subir tres puntos", precisó. El nuevo funcionario se refirió también a la relación entre el Ejecutivo y el Judicial: "no puedo concebir que en el tema de seguridad, el Ejecutivo hable un idioma y el Judicial otro. ¿Por qué no nos sentamos a redactar una legislación que los jueces digan 'se puede aplicar'?", precisó. Otro de los cuestionados fue el ministro de Agricultura, Mario Salaverría, al frente de la Asociación Azucarera de El Salvador durante 16 años. Nuevamente las expectativas fueron altas. Salaverría aseguró que "en la agricultura lo más importante es el aspecto social", razón por la cual su cartera luchará "por la gente con menos recursos y menos oportunidades".

El día 3, continúan las entrevistas periodísticas. El ex presidente de la República, Armando Calderón Sol, mediante *La Prensa Gráfica* brindaba algunas recomendaciones al nuevo mandatario: "debería revisar muy bien los puntos que plantea la oposición, y ver en qué puntos exactamente puede hacer una amplitud o ceder en algunas posiciones. No se podrá ceder en todo, pero sí mostrar voluntad de llegar a un arreglo", recomendaba uno de los que levantó su voz en contra del ex presidente Flores, cuando éste aparecía con bajos niveles de aceptación. Ese mismo periódico se movilizó para poner en común los proyectos de otros ministros. Por ejemplo, el encargado de hacienda, Guillermo López Suárez, aseguró que la aprobación del presupuesto del Estado es "la prioridad a atender en estos momentos", mientras que la ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, aseguró que la apertura comercial y la competitividad seguirán siendo los ejes prioritarios de la cartera que comanda.

Por otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Maza, siguiendo el discurso del presidente Saca, descartó que los servicios de salud fueran privatizados, pero dijo que concesionaría algún servicio hospitalario si fuera necesario. En ese mismo or-

den, el nuevo ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, descartó cambios en el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), creación de su antecesor. Para Gutiérrez, dicho fondo tendría la misma estructura que en la actualidad, es decir, se enfocaría en las vías principales departamentales y no en las vías de las ciudades, competencia de las municipalidades que reclaman apoyo de Obras Públicas para darles mantenimiento.

Ese día, el 3 de junio, los principales líderes de la oposición política —incluidos los del FMLN— acudían a Casa Presidencial para discutir con el nuevo presidente los temas más importantes de la coyuntura, tales como la aprobación del presupuesto general, la reforma del sector salud y el fortalecimiento de los municipios. Los presentes consiguieron instalar una mesa permanente interpartidaria, que discuta los temas de nación. Los políticos pactaron orientar a sus parlamentarios para que aprobaran el presupuesto en una semana, a partir de la fecha del encuentro. Días después, el 16, el coordinador general del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, llegó a Casa Presidencial, acompañado de otros efemelenistas, para rubricar el acuerdo que daría vida a la "Mesa de diálogo y entendimiento", en la que participarían los restantes partidos políticos. Los dirigentes del partido de izquierda condicionaron su continuidad en la mesa a la participación de la iglesia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), los sectores sociales y la observación de la OEA, petición que fue recibida por el mismo Antonio Saca, quien dijo que se tomaría en cuenta.

Durante esa misma jornada, los efemelenistas se reunieron con representantes de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), para discutir asuntos relacionados a la concertación nacional. Sánchez Cerén comentó a la salida del encuentro que compartían con la fundación empresarial "su planteamiento de reforma electoral". Mientras tanto, el presidente de FUSADES, Antonio Cabrales, aseguró que los representantes del partido de izquierda le presentaron un documento en el que plantean sus puntos de vista, pero dijo que no debe confundirse el concertar con "cogobernar", debido a que "el pueblo en la elección reciente eligió un gobierno y éste tiene la potestad de administrar el país".

Pero la mesa de concertación no fue la única iniciativa con la que Saca pretendía mostrar su talante conciliador. Uno de los asuntos que más pro-

pició enfrentamientos entre las diferentes fuerzas políticas y sociales del país, a saber, el combate a las pandillas, pareció llegar a una etapa de consensos cuando el presidente de la República anunció la instalación de un foro interdisciplinar que discutiría el asunto. Con unos pocos días de vigencia, la segunda ley antimaras del Ejecutivo — brazo jurídico del plan policial Mano Dura— fue también sometida a discusión. El foro sirvió de catarsis para unos jueces que, apegados a la Constitución, se negaron a aplicar una ley que fuera declarada anticonstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Jueces, funcionarios de gobierno y representantes de otras instituciones se sentaron a dialogar mientras el nuevo presidente daba su aval a las discusiones. Sin embargo, habría que aclarar que el repentino cambio de rumbo del mandatario se explica, en gran parte, por su postura ante la recomendación que hiciera el Comité de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas, incluida en un informe emitido el día 4 de junio.

Dicha oficina de la ONU recomienda al Estado salvadoreño, entre otras cosas, a que derogue la ley antimaras, que se hallaba en vigencia desde el 2 de abril pasado, resolviendo que la referida normativa lesiona los derechos de los niños que El Salvador se comprometió en respetar, al suscribir la Convención de los Derechos del Niño en 1990. El Comité indicó que en su lugar debía aplicarse la Ley del Menor Infractor, para procesar a adolescentes delincuentes. Dos días después, el presidente Saca dijo que su gobierno tomaría en cuenta las recomendaciones de la ONU, aunque dijo que presentaría una nueva ley permanente antipandillas que resultara de la consulta con los diversos sectores de la justicia. Como quiera que sea, el pragmatismo político le decía al presidente que no le convenía contradecir una recomendación de esa envergadura, sobre todo durante los primeros días de su gestión.

El día 7, Saca hizo la convocatoria oficial a todos los sectores involucrados para discutir el combate de la maras, en atención al llamado de la ONU. Algunos funcionarios del sistema judicial se pronunciaron a favor de la medida presidencial; de ese parecer fueron los magistrados Ulices del Dios Guzmán y Gustavo Vega, dos de los más críticos a las leyes antimaras. Guzmán manifestó que a la reunión “debe irse con una agenda abierta y no necesariamente con la idea de salir con una nueva ley”. Al día siguiente, la viceministra de Gobernación, Silvia de Aguilar, fungió como moderadora

del primer foro realizado para discutir el tema. Al primer encuentro del foro acudieron otros funcionarios de justicia, en representación del Órgano Judicial y de otras instancias. El día 11, trascendió que Saca esperaba los resultados del foro para tomarlos como base del plan “Supermano dura”, iniciativa cuya que prometía seguir con el combate a las pandillas por la vía policial. En la discusión del foro se sometió a estudio el cuerpo jurídico relacionado a la criminalidad juvenil: los Códigos Penal y Procesal Penal, la Ley del Menor Infractor, la Ley Penitenciaria y la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor.

Paralelo a las discusiones, el 14 de junio, *La Prensa Gráfica* revela estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) que indican un preocupante repunte de asesinatos en el presente año, respecto del año anterior. De acuerdo a la PNC, entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año en curso se habían registrado un total de 1 040 homicidios en todo el país, frente a los 977 asesinatos cometidos en el mismo periodo de 2003. Según la fuente, el 70 por ciento de los homicidios está relacionado con las maras y en el 73.5 por ciento de los casos se utilizó arma de fuego. Además, detalla, 611 se registraron en las zonas urbanas y 429 en la zona rural. El área metropolitana de San Salvador sigue siendo la zona más violenta del país, con 366 homicidios, seguido de la zona occidental, que registra 281 asesinatos. La zona oriental reporta 102 homicidios en el mismo periodo. De acuerdo con la fuente, Sonsonate, al occidente, se ha convertido en el departamento más violento del país, con 161 crímenes desde enero hasta la primera semana de junio. Con todo, la Policía no explicó el repunte de homicidios a pesar de la aplicación del Plan Mano Dura, pronto a cumplir un año de vigencia en julio próximo.

El día 15, los participantes en el foro decidieron no crear una nueva normativa antimaras para combatir la delincuencia generada por los pandilleros, sino reformar la normativa vigente. A casi un año de vigor, 16 mil pandilleros fueron detenidos por la Policía desde que Francisco Flores impulsara el Plan Mano Dura en julio del año pasado, pero una ínfima parte de ellos fue puesto entre las rejas por los jueces.

Por otra parte, en lo que se refiere a la actividad parlamentaria, sin duda han sido las negociaciones para aprobar la Ley del Presupuesto General de Gastos del Estado lo que más acaparó la

atención de la prensa nacional. Tal discusión cobró mayor relevancia debido a los acercamientos registrados entre el nuevo mandatario y los principales líderes de oposición. Las fracciones de ARENA y el FMLN fueron los principales actores políticos, pues fueron ellos quienes mostraban posiciones antagónicas y de quienes dependió, a fin de cuentas, el aval legislativo para el presupuesto general. El 8 de junio, el encierro entre diputados de ambos partidos concluyó en un primer acuerdo: aumentar a 114 dólares mensuales la pensión mínima, una condición del partido de izquierda para dar sus votos al presupuesto.

Simultáneamente, tenía lugar una segunda reunión entre representantes del Ejecutivo y líderes de la oposición política, reunidos en la recién creada mesa de concertación. Pero un día después, los acuerdos alcanzados se vieron interrumpidos luego que la fracción de ARENA propusiera una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), en el sentido de incluir, como requisito para pensionarse, no sólo el hecho de haber cumplido 30 años de servicio al frente de una empresa —independientemente de la edad—, sino el requisito ineludible de haber cumplido los 60 años, en el caso de los hombres, y 55, en las mujeres. El FMLN se mostró en desacuerdo con la propuesta arenera, al tiempo que señaló oscuros propósitos en la medida.

Como contrapartida, los efemelenistas propusieron que de los 11.7 millones de dólares designados al Ejecutivo para publicidad, pasajes, viáticos y combustibles, se recortara 3.1 millones y reorientarlos a otras áreas. En vista de la dilación del aval parlamentario, el plan de gastos de la nación, el día 12, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Zepeda, criticó la actitud de las fracciones de ARENA y el FMLN, al tiempo que instó a la población para que ejerciera medidas de presión que obligaran a los diputados llegar a un acuerdo, luego de más de seis meses desde que el Ejecutivo presentara la propuesta. El 15, la fracción de ARENA obtuvo el apoyo de los diputados del PCN, PDC y CDU para reformar, con 56 votos, la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, estipulando la jubilación, únicamente, a los hombres que hayan cumplido los 60 años y a las mujeres los 55. Los diputados aseguraron que con la medida se sacaría a flote el sistema de pensiones debido a la carga que se le quitaría al Estado. De acuerdo a las estimaciones oficiales, el Estado salvadoreño se

ahorrrará en los próximos cinco años unos 99.5 millones de dólares destinados a los 26 mil 750 cotizantes que se jubilarían sin cumplir la edad de retiro si no se hubiera aprobado la reforma.

El 16, los diputados habían alcanzado un acuerdo para aprobar el presupuesto: la comisión de hacienda afinó la redacción del dictamen del plan de gastos del Estado, emisión de bonos y reformas a la Ley del FODES para asignar el 7 por ciento a las alcaldías. Así, el día 17, los diputados finalmente aprobaron la Ley del Presupuesto General de la Nación, que asciende a 2 mil 793.9 millones de dólares, incluyendo la emisión de 289 millones de dólares en bonos. De este modo, la aprobación del presupuesto fue, sin lugar a dudas, uno de los debates más encendidos de la coyuntura política poselectoral.

Finalmente, dentro del ámbito político, el debate interno del FMLN no se escapó de la cobertura periodística durante el mes. Y es que la prensa nacional continuó presentando a un partido carcomido por las divisiones internas, cediendo la palabra a los inconformes con la dirección del partido. El 3 de junio, abordado por un rotativo nacional, el alcalde de Nejapa, René Canjura, ya identificado con la línea moderada del FMLN, lanzó duras críticas a la dirigencia de su partido e intentó definir el proyecto del que se siente parte al interior de su partido. "En el FMLN hay una dirigencia, pero no toma en cuenta a todos. ¿Cómo me pueden reclamar a mí si tengo un coordinador general incapaz de hacer cumplir los estatutos?", demandó el edil; luego, añadió que se encuentra en "el grupo de los que creen que hay que rescatar al FMLN". El día 16, el mismo rotativo publica una entrevista con Medardo González, el más fuerte candidato para dirigir al partido de izquierda. En el marco de la entrevista, González se refiere a las pasadas elecciones destacando el apoyo político alcanzado por su partido en las urnas: "el FMLN no ganó las elecciones, pero ganó políticamente. Somos un partido poderoso", aseguró. Además, se refirió a la situación que atraviesa la institución que pretende dirigir: "se está haciendo mucho daño a la imagen del partido, hay otro tipo de intereses de fondo de parte de algunos compañeros que tratan de crear una imagen de división y debilidad", fustigó. Por un lado, los inconformes y por otro los seguidores de la ortodoxia efemelenista, el FMLN apareció ante los salvadoreños como un partido que no ha sabido manejar con inteligencia unos resultados

electorales contrarios a sus intereses, pese al desmedido optimismo de la cúpula.

Decir que el FMLN no ha logrado superar el impacto de la derrota electoral de marzo pasado es volver sobre algo que se ha repetido hasta la saciedad. Sin embargo, no es irrelevante insistir sobre lo mismo una vez más, por cuanto que ese hecho refleja con pasmosa contundencia la incapacidad del partido de izquierda para enfrentar sus propios fantasmas. Ante todo, el fantasma de la renovación interna: la palabra “renovación” no sólo ha sido usada con los propósitos más bajos — asociados, en la mayoría de casos, a meras disputas por el poder—, sino que ha sido demonizada. Esto último ha impedido a los dirigentes históricos del FMLN asumir y llevar adelante con seriedad los necesarios cambios al interior de su organización. Es innegable que el FMLN ha cambiado desde que era un ejército guerrillero hasta su conversión en partido político, pero esos cambios no han sido todo lo sustantivos que debieran. Más aun, se ha tratado de cambios más forzados por las circunstancias que por una toma de conciencia de la necesidad de revisar sus fundamentos organizativos e ideológicos.

Las coyunturas favorables —o al menos leídas de ese modo por sus principales figuras— han afianzado las resistencias para una renovación (o redefinición) del FMLN, dejando a sus abanderados sin trincheras desde las cuales defender sus posturas. Las coyunturas desfavorables han dado pie a la posibilidad de llevar nuevos aires al partido, pero quienes se oponen a cualquier cambio en su interior, lejos de favorecer el florecimiento de otras formas de conducirlo, han cerrado filas y se han empecinado en defender sus posiciones y el poder que las sostiene. Esta ha sido la historia del FMLN desde 1992 hasta la fecha; es por ello que las expulsiones, las huidas y el fraccionamiento han sido una constante en su desenvolvimiento como partido político. La situación actual del FMLN es un capítulo más en este interminable vaivén de resistencias y ansias de cambio, en el que se mezclan, a veces indiscriminadamente, buenos propósitos —es decir, propósitos nobles y sinceros— con ambiciones e intereses de poca monta.

A la par del fantasma de la renovación, está el fantasma de la identidad del FMLN. A estas alturas, no es totalmente claro qué es el FMLN —o qué ofrece a la sociedad— en términos ideológicos. Algo se sabe acerca de ello: en los estatu-

tos del partido se habla de socialismo, revolución y democracia como referentes ideológicos. Pero no hay —ni se ha elaborado hasta ahora— un planteamiento que, además de desarrollar cada uno de esos aspectos, los articule y los convierta en criterio de orientación práctica para sus bases, mandos medios y cuadros dirigentes.

Como es natural, esto no se puede hacer sin debate y sin discusión, en los cuales deben ventilarse distintas posturas y distintos puntos de vista. Tampoco es algo que deba hacerse de un día para otro, bajo presiones coyunturales o como respuesta a presiones de la opinión pública, sino con el tiempo suficiente y las convicciones bien cimentadas en torno a un propósito que debería ser el de todos los efemelenistas: forjar un partido a la altura de las necesidades de la sociedad salvadoreña en el momento actual. Cumplida esta tarea, que ciertamente no es fácil, viene la siguiente: elaborar una propuesta de gestión gubernamental que, además de ser una opción a la emanada de la derecha, sea factible y realista. Así las cosas, el teatro de un FMLN fragmentado y los primeros indicios de concertación entre las fuerzas políticas y sociales cierran el capítulo de la política salvadoreña durante el mes de junio.

Pero la reseña del mes quedaría incompleta si no se consideran algunos aspectos económicos relevantes tales como la revisión oficial de las perspectivas económicas para el presente año, el impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo y el anuncio presidencial de un nuevo plan de rescate del agro. En torno al primer punto, el 6, el Banco Central de Reserva (BCR) anunciaba que el retraso en la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2004 redujo el nivel de inversión pública en 85.2 millones de dólares, afectando “las decisiones de inversión y de consumo del sector privado”. Luz María de Portillo, presidenta de la institución, explicó que “57 nuevos proyectos y 17 proyectos de arrastre no se iniciaron en su oportunidad, debido a la tardía aprobación del presupuesto, afectando las áreas de educación, vivienda, agua, seguridad pública, agropecuario, medio ambiente y desarrollo comunal. La inversión que no se podrá ejecutar —prosi-gue la funcionaria— asciende a 85.2 millones de dólares, equivalente al 15.7 por ciento del total de inversión programada para el año”.

Pero el impacto continúa. De acuerdo a la fuente, “no se generaron entre 5,500 y 6,000 em-

pleos directos y se dejaron de percibir entre 25 y 28 millones de dólares en remuneraciones provenientes de los proyectos de inversión que ya no se ejecutarán durante el año, impactando sobre la actividad económica sectorial y las perspectivas de crecimiento económico del país, afectando el crecimiento de la demanda agregada por la reducción de la inversión y el consumo". Como resultado de lo anterior —concluye el comunicado de prensa— "se ha revisado la estimación de crecimiento económico para 2004, estimándose una reducción de 0.5% por el impacto de la tardía aprobación del Presupuesto y proyectándose el crecimiento del Producto Interno Bruto en términos reales en un rango entre 1.8-2.3% para el presente año".

Respecto de la agricultura, desde el 1º de junio, el presidente Saca anunció el plan PROAGRO, enfocado al rescate del sector agropecuario, mediante la creación de programas de empleo estacional para zonas cafetaleras, manejo de contingentes, fomento de uso de tecnologías y de semillas mejoradas, la diversificación agrícola, el desarrollo forestal y la creación de una policía rural, entre otros. A propósito de lo anterior, el nuevo ministro de Agricultura, Mario Salaverría, comentó que se estaba creando "una política integral con medidas puntuales y cualificables para diversos sectores". El plan incluye un nuevo acercamiento entre el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y los agricultores.

Por otro lado, el día 11, desde Quito, Ecuador, el canciller salvadoreño, Francisco Laínez, pidió a la OEA que se pronunciara a favor de detener el incremento en los precios internacionales del petróleo que empezaban a impactar el bolsillo de los salvadoreños. Al mismo tiempo, Laínez logró con su similar de México, Luis Derbez, un acuerdo que garantizara acciones dirigidas a proteger a los inmigrantes salvadoreños que cruzan el territorio mexicano en su camino hacia Estados Unidos. En el marco del encuentro, el canciller venezolano, Jesús Arnaldo Pérez, anunció la decisión de su país de exportar el barril de crudo a los países de América Latina con una banda de precios de entre 25 y 30 dólares. Trascendió que el país importa de ese país un 30 por ciento del petróleo que consume.

Además, según datos revelados por la prensa, el 65 por ciento del precio que el consumidor paga por la gasolina en el país está determinado por las cotizaciones en el mercado internacional, sin que el Estado pueda intervenir allí; el 25 por ciento del precio pagado en las estaciones de servicio tiene

como destino el pago de aranceles, el IVA y la tasa de 0.20 centavos de dólar destinados al FOVIAL, mientras que el resto es distribuido en los márgenes que perciben las empresas distribuidoras y las compañías petroleras. Al respecto, la nueva ministra de Economía, Yolanda de Gavidia, expresó que se estudiará "eliminar las barreras artificiales y apoyar los temas de generar mayor competencia, pero los usuarios también deben de poner su parte contribuyendo a ahorrar el combustible".

Una de las consecuencias del aumento en el precio del petróleo ha sido, precisamente, el alza en los costos de generación de electricidad, lo cual planteó otro tema de debate: la necesidad de establecer reglas claras en el mercado de dicho producto. Así, el día 10, a raíz del anuncio del gobierno por el incremento de un 3 por ciento en las facturas de energía eléctrica para consumidores no subsidiados, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) demandaron del Ejecutivo reglas claras y reestructuraciones en el mercado eléctrico salvadoreño. Los empresarios e industriales señalaron que el gobierno compra energía eléctrica más cara (generada en térmicas que utilizan combustibles) y desecha comprar energía producida en las centrales hidroeléctricas, la más barata del mercado. Según datos de la prensa, El Salvador genera el 40 por ciento de la energía que consume por fuente geotérmica, mientras que la hidroeléctrica es de apenas el 25.9 por ciento. Aún así, el mes concluyó con la puesta en el papel de las intenciones de la parte gubernamental por cambiar las reglas de juego en el mercado eléctrico, con el refuerzo tecnológico de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).

El 21 de junio, el presidente Saca se reunió con dirigentes de ANEP y FUSADES para discutir el anunciado pacto por el empleo. Sus interlocutores son viejos conocidos: los grandes empresarios y el centro de pensamiento que éstos financian. A la cita también acudieron el director de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Gustavo Belismelis, miembros del gabinete de gobierno y otros prominentes empresarios e industriales salvadoreños. Pero, lejos de la expectativa mediática que el cónclave generó, no hubo indicios que permitieran asegurar un cambio de rumbo en la conducción de la política laboral de los últimos años. El diálogo de los empresarios con el presidente no

pasó de ser un conversatorio entre las personalidades más prominentes del bloque hegemónico de la derecha, la amalgama de intelectuales, funcionarios públicos, empresarios, banqueros e industriales que han trazado los destinos del país desde los últimos quince años.

El punto a discutir fue la institucionalización de un “pacto por el empleo” entre empresarios y gobierno. Pero el encuentro fue el escenario propicio para rendir honores mutuos entre los representantes de los sectores más pudientes de la sociedad. La camaradería fue la regla. Belismelis comentó que “este va a ser un gobierno ejemplar, que va a dialogar con todos los sectores”, mientras puso a disposición del gobierno el apoyo financiero de la banca salvadoreña. El presidente de FUSADES, Antonio Cabrales, dijo, según una nota de prensa de Casa Presidencial, que las gremiales que él representa se sienten halagadas y satisfechas luego de la reunión, “especialmente porque se sienten escuchados y tomados en cuenta por el gobierno del presidente Saca”. Cabrales también se puso a la orden del mandatario: “queremos que el presidente cuente con su tanque de pensamiento, que es FUSADES”. En similares términos se expresó el presidente de ANEP, Federico Colorado, quien dijo que su sector se encuentra listo y dispuesto “para trabajar de la mano del gobierno del presidente Saca, para buscar soluciones creativas a los problemas sociales”. Colorado agregó que “el trabajo conjunto entre sector privado y gobierno puede dar tremendos beneficios para el desarrollo”.

La iniciativa de Saca responde a sus expresas intenciones de dialogar con todos los sectores nacionales. Ese estribillo lo ha repetido desde que se hallaba en campaña y lo ha trasladado a su discurso de toma de posesión. “Para poder gobernar —dijo en la ceremonia de su investidura— hay que saber escuchar”. La disposición al diálogo del entonces candidato fue una de las virtudes en que se basó la poderosa campaña arenera que condujo al partido oficial al frente de un cuarto periodo consecutivo en el poder. El pacto por el empleo, en el mejor de los casos, es un primer peldaño para sentar las bases de un diálogo nacional; pero la experiencia sugiere más escepticismo que optimismo. Saca escuchó a quienes quiso durante su recorrido por el país como candidato presidencial.

De igual modo, a la reciente cita en la casa de gobierno acudieron sus incondicionales aliados, los grandes empresarios, que junto con el sector

financiero y el aparato estatal que controla el partido de gobierno conforman una elite que tiene la suficiente capacidad como para tomar decisiones de país sin mayores obstáculos. Fuera de ese círculo quedan quienes, difiriendo del discurso oficial, no llegaron al encuentro porque simplemente no tienen cabida en ese selecto grupo. Otros sectores nacionales que tienen que ver con la situación del empleo en el país, como los trabajadores mismos, no llegaron a la cita, ni mucho menos a sentarse a la mesa de honor. En un escenario menos optimista, el cacareado pacto por el empleo no pasa de ser un monólogo de la derecha, interesada en mantener una falsa imagen de apertura a los distintos sectores políticos, sociales y económicos del país. Es la vieja pero fallida estrategia de comenzar un nuevo gobierno con los brazos abiertos y el voluntarismo que caracterizó, por ejemplo, los inicios de Francisco Flores al frente del Ejecutivo. En ese sentido, Saca tiene el gran reto de cumplir la palabra que ha empeñado desde su campaña electoral y abrir su círculo para incluir a quienes no necesariamente compartan su óptica. Máxime cuando la situación del empleo nacional no parece ser tan bonancible como suele sostenerlo el discurso oficial.

Las estadísticas manejadas por el gobierno hablan de una tasa de desempleo total del 6.2 por ciento, pero suelen soslayar los fenómenos del empleo informal y el subempleo. Para 2002, por ejemplo, el 49.7 por ciento de la población urbana ocupada se empleó en el sector informal y las mujeres llegaron a representar el 52.5 por ciento del total de trabajadores informales, según un reciente estudio de FUNDE. Para el mismo año, el subempleo representó el 17 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), un índice bastante elevado. El mismo estudio señala una serie de limitaciones metodológicas que sugieren que las estadísticas oficiales no son del todo atinadas y que, por ende, los niveles de desempleo, subempleo y empleo informal son más altos.

El anuncio del pacto por el empleo coincidió, además, con la presentación de un informe del organismo internacional Human Rights Watch, que denuncia las vejaciones que padecen niños y niñas en las plantaciones de azúcar afincadas en todo el país. El informe suscitó un debate entre quienes, como el editorialista de *El Diario de Hoy*, consideran que es preferible ver a niños laborando durante pesadas jornadas que verlos delinquiendo en las calles o involucrados en las maras y quienes,

por otro lado, sostienen que deben eliminarse esas prácticas que no sólo exponen a cientos de niños a lesiones graves, sino que les limitan el acceso a la educación y a otros bienes intangibles.

La misma organización denunciaba, a principios del año, los abusos contra niñas trabajadoras domésticas en El Salvador, aduciendo que las labores que realizan interfieren "con su educación e implica una explotación económica y la realización de tareas peligrosas, en violación de la legislación salvadoreña y del derecho internacional". Como quiera que esto sea, lo cierto es que el empleo infantil es uno de los más grandes desafíos de quienes se han sentado con el presidente para discutir la situación del empleo nacional. En suma, el grupo hegemónico de la derecha sí tiene la facultad de cambiar la situación del empleo en el país debido a la capacidad de movilización, recursos y cohesión que le caracteriza, pero padece de una abulia crónica.

Los primeros días de gobierno de Antonio Saca, pues, han dejado una sensación de relativa calma entre los salvadoreños, luego de intensas semanas de campaña electoral y cabildos políticos por la aprobación del presupuesto general de gastos. La ceremonia de traspaso de mando fue uno de los hechos más trascendentales de la coyuntura actual y, como era de esperarse, generó gran expectativa entre la prensa y otros sectores de la vida nacional. No es irrelevante sostener que el proceso de traspaso de mando ha logrado sus objetivos. Lo peor que podría pasarle a una democracia es que un nuevo gobernante, masivamente votado, como lo fue Saca, dos meses después no lograra siquiera entusiasmar a un sector importante de la población. De igual modo, no constituye ninguna sorpresa que el partido de oposición haya salido mal evaluado, bastante abajo del partido oficial. En el caso del FMLN, después de las elecciones no ha logrado presentar un proyecto coherente que permita tan siquiera dar la ilusión a los salvadores que el partido esté dispuesto a enmendar los errores del pasado. No sólo que sus dirigentes que perdieron las elecciones siguen aferrando a sus posturas contra viento y marea, sino que también la estrategia de lucha frontal en contra del nuevo presidente no es legible para buena parte de los salvadoreños. Dicho de otra manera, mientras que ARENA se beneficia del entusiasmo y la cuota de esperanza que despierta el nuevo presidente, el FMLN se queda anclado en el pasado, en una lucha sin cuartel entre sus principales dirigentes por el control de la organización.

El discurso de investidura del nuevo presidente iba en la línea de capitalizar la cuota de simpatía y de sueño que caracteriza la actual coyuntura. El mandatario no presentó ningún proyecto en concreto. Pero sí muchas generalidades, susceptibles de hacer soñar a muchos. Recalcó su buen talante, aquello que lo define como bonachón, sencillo y de origen humilde. Prometió a los salvadoreños que no se dejará marear por el poder y que estará siempre al lado de los más necesitados, por haber pertenecido a este gremio de desamparados que constituye la mayor parte de la población. Estas palabras, sin duda, endulzan los oídos de una población a la que no han llegado las bondades de la economía neoliberal en la que han hecho fortuna los grandes empresarios de ARENA. Como si fuera poco, Elías Antonio Saca declaró que no se verá en su "gobierno dogmatismo económico, ni veneración desproporcionada a la lógica del mercado".

Dicho en lenguaje sencillo, Saca anunció que se desmarcará de la ortodoxia neoliberal que fue el principio ideológico sobre el que su antecesor hizo descansar sus acciones de gobierno. En otros términos, anunció una ruptura con un pensamiento en boga en su partido, que siempre ha preconizado las bondades del mercado y la justicia con que éste reparte las riquezas nacionales. Hay que esperar y ver para creer si realmente el presidente Saca podrá honrar sus declaraciones. No hace falta mucha agudeza para saber que la realidad suele contradecir los sueños de los políticos. Además, especialmente en el caso de Saca, hay una gran hipoteca que pende sobre su ascenso al poder. Su campaña fue financiada ampliamente por los grandes empresarios que han hecho fortunas, precisamente en la concepción economicista que él dice no compartir. ¿Cuántos márgenes de maniobra tendrá el presidente frente a los intereses dominantes en su propio partido? ¿Encontrará un mecanismo de armonización entre los intereses del gran capital y los de los salvadoreños más pobres?

En consecuencia, el primer discurso del presidente plantea un nuevo estilo de gobernar que, de concretarse, podría evitar que esta presidencia se asimilase a las tres anteriores. Este nuevo estilo consiste en escuchar con humildad y paciencia, trabajar con seriedad, buscar la respuesta con sensibilidad humana y servir a los demás. Con todo, Saca aspira a un gobierno con un marcado carácter humano y, por ende, muy sensible a las necesidades de la población. A su juicio, la pobreza es el

obstáculo que hay que vencer, porque ella impide la realización humana de la población. Tal vez pensando en las prevenciones que esta cuestión despierta en los círculos del capital, el mandatario fundamenta este énfasis en la insistencia que desde hace un tiempo vienen haciendo los bancos multilaterales que, desde hace algunos años, señalan la urgencia de prestar atención a la agenda social como un requisito indispensable para el crecimiento y el desarrollo económico. Hay, pues, razones para sospechar que lo social es entendido como un paliativo ante los estragos que causa la política económica neoliberal. La propuesta no es nueva, estaba prevista en los primeros planteamientos del esquema neoliberal. Su viabilidad depende de una agenda social que alivie los daños más graves, ocasionados por sus reformas y ajustes.

Pero los gobiernos de ARENA y la derecha nacional nunca han dado importancia a lo social. La cuestión de los pobres y de la pobreza ha sido denominador común de todos sus gobiernos, cada uno la ha formulado a su estilo, pero sin mayores consecuencias. El tema no es nuevo, la indiferencia con que ha sido tratado tampoco. Al parecer, por lo que se deduce de las intenciones del presidente Saca, el partido y la derecha ya habrían comprendido que esa dimensión de la realidad nacional no puede ser olvidada. De ahí que Saca ha-

ble de retraso y su interés en poner al día esa agenda. Así, pues, lo social siempre estaría subordinado a la política económica y no tendría entidad en sí mismo. Para eso, sería necesario modificar radicalmente el esquema económico neoliberal y a eso no está dispuesto el nuevo gobierno.

Perdido entre la retórica social y personal, el presidente Saca sostuvo que la generación de empleo depende del aumento de la producción y la competitividad, de la apertura comercial, la inversión extranjera y de un pacto de empleo con el gran capital. El tratado de libre comercio con Estados Unidos continúa siendo la gran solución —“espacio de desarrollo incalculable”, “ganancia de todos”, “beneficios de globalización, bondades de apertura”, “prosperidad”—. Es decir, las líneas fundamentales del esquema son las mismas. Incluso hizo alarde del mismo voluntarismo de su antecesor, “nada ni nadie nos hará retroceder”. La promesa más concreta para el deprimido sector agrícola fue la policía rural. Es difícil pensar que esta postura es una simple táctica para no intranquilizar al gran capital y a los neoliberales del partido. El cuarto gobierno de ARENA sería, pues, más de lo mismo, pero con otro estilo personal y los paliativos recomendados por los diseñadores del esquema neoliberal. No hay que olvidar que ARENA se movilizó para evitar un cambio de rumbo económico.

